



Cooperación internacional contra narcoterroristas

El abatimiento de *El Mencho* marca, sin duda, un parteaguas en la historia reciente de la seguridad pública en México. La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, líder indiscutible del *Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)*, no solo representa un golpe quirúrgico a la estructura criminal más expansiva y violenta del país, sino que envía un mensaje inequívoco de que el Estado mexicano ha decidido, ya por iniciativa propia o por presión de la Casa Blanca, combatir a fondo a los cárteles de la droga.

Para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se trata de un logro espectacular. No únicamente por el simbolismo de abatir al capo más buscado de la última década, sino porque implica un viraje operativo y político respecto de la estrategia de seguridad que predominó en el sexenio anterior.

La narrativa de “abrazos, no balazos” impulsada por Andrés Manuel López Obrador apostó por atender las causas sociales de la violencia, pero evitó el enfrentamiento frontal con los principales capos. Hoy, la realidad demuestra que la presión

DESDE SAN LÁZARO

**Alejo
Sánchez Cano**

Opine usted:
opinion@elfinanciero.com.mx

nacional e internacional terminó por imponer una estrategia distinta y eficaz.

En este resultado fue decisiva la intervención de agencias de inteligencia de Estados Unidos. El intercambio de información, la vigilancia tecnológica y el rastreo financiero transnacional fueron determinantes para ubicar y neutralizar al líder del *CJNG*.

Washington había elevado la presión al considerar a varios cárteles mexicanos bajo la categoría de narcoterroristas, una designación que no es menor. La calificación implica un endurecimiento en los instrumentos legales, financieros y operativos para perseguirlos, congelar activos y ampliar la jurisdicción extraterritorial.

La declaración del gobierno norteamericano al nominar a los narcotraficantes como organi-

zaciones terroristas marcó un punto de inflexión. Más allá del debate sobre soberanía, lo cierto es que México no podía ignorar el nuevo contexto. La cooperación bilateral dejó de ser opcional para convertirse en una obligación. El abatimiento de *El Mencho* es la primera contundente prueba de que esa coordinación puede rendir frutos concretos.

Sin embargo, el desafío apenas comienza. Desarticular la cabeza de un cártel no significa desmontar su estructura. El *CJNG* no era únicamente un liderazgo, ya que opera como una red de franquicias criminales distribuidas en buena parte del territorio nacional.

Desde el Pacífico hasta el Bajío, desde la frontera norte hasta el sureste, su modelo combinó control territorial, diversificación de delitos —trasiego de fentanilo, extorsión, tráfico de personas, *huachicol*, minería ilegal— y una capacidad de fuego que lo colocó entre los grupos más agresivos.

La historia reciente muestra que el descabezamiento de un capo suele detonar luchas intestinas por la sucesión. El riesgo inmediato es la fragmentación violenta. Los lugartenientes y



operadores regionales podrían disputar el control, generando enfrentamientos abiertos no solo entre facciones del propio CJNG, sino contra cárteles rivales que buscarán aprovechar la coyuntura. Esa disputa puede traducirse en una ola de homicidios, bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques contra fuerzas de seguridad.

El gobierno federal, junto con los estados y municipios, se encuentra en alerta máxima. Existen amenazas comprobadas de atentar contra la clase política, particularmente en regiones donde el CJNG había tejido redes de complicidad o intimidación.

Una de las características del narcoterrorismo es precisamente detonar el miedo colectivo para presionar decisiones públicas. Tras el abatimiento de su líder, el grupo podría recurrir a acciones espectaculares para demostrar que sigue vivo y que conserva capacidad de daño.

La reacción del Estado será determinante. No basta con celebrar el golpe estratégico. Se requiere un despliegue coordinado que impida el reacomodo violento. Inteligencia financiera para bloquear flujos de dinero, presencia territorial sostenida de fuerzas federales, depuración policial en los ámbitos locales y, sobre todo, control político firme para evitar que autoridades intimidadas cedan espacios.

El viraje en la estrategia también tendrá repercusiones

legislativas. En San Lázaro ya se anticipa la discusión de reformas que fortalezcan el marco jurídico contra el terrorismo y la delincuencia organizada, alineándolo con estándares internacionales.

La clasificación de narcoterrorismo obliga a revisar los esquemas punitivos, de cooperación judicial y mecanismos de extradición. México deberá equilibrar la defensa de su soberanía con la necesidad de actuar con eficacia frente a organizaciones que operan sin fronteras.

La presidenta Sheinbaum enfrenta ahora una prueba histórica. El abatimiento de *El Mencho* es una victoria táctica; convertirla en victoria estratégica dependerá de la capacidad de contener la violencia subsecuente y evitar que otro liderazgo igual o más radical emerja de las sombras. La ciudadanía, golpeada por años de inseguridad, espera resultados tangibles y sostenidos.

El desafío es evitar que el vacío se llene de sangre. Si el gobierno logra estabilizar el escenario y consolidar el nuevo enfoque de inteligencia y cooperación internacional, el abatimiento de *El Mencho* será recordado no solo como un hecho espectacular, sino como el momento en el que México decidió abandonar la inercia y enfrentar con determinación a quienes, durante demasiado tiempo, sembraron terror y violencia.